



EDITORIAL

Convivencia escolar

Conviene poner atención no solo al aumento de casos, que por cierto, es preocupante. También es clave observar los elevados niveles de violencia que está alcanzando el maltrato escolar, sus causas y la capacidad de los establecimientos educacionales de resolver estas problemáticas.

Es indudable que la situación reclama una atención especializada, así como la presencia de nuevos recursos psicopedagógicos y sociales, porque las raíces de los comportamientos violentos no están en la escuela, y se requiere trabajar con esa perspectiva.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Superintendencia de Educación, las denuncias contra establecimientos educacionales de la región, relativas a convivencia escolar, muestran un aumento sostenido, con 263 casos en 2022, 312 en 2023, 323 en 2024 y 346 en 2025, lo que representa un alza de 31,6% en los últimos tres años.

Al desagregar, el maltrato a estudiantes o párvulos continúa siendo la principal causa de los reclamos. Entre 2022, 2023 y 2024, estos casos aumentaron progresivamente de 152 a 184 y 193, aunque en 2025 se observó un descenso, a 170 denuncias.

Desde la Superintendencia plantean que el incremento no solo responde a un creciente número de conflictos, sino que también a un mayor conocimiento y empoderamiento de la población respecto de sus derechos y, además, revelaría una mayor confianza en los mecanismos institucionales para proteger esos derechos.

Conviene poner atención no solo al aumento de casos, que por cierto, es preocupante. También es clave observar los elevados niveles de violencia que está alcanzando el maltrato escolar, sus causas y la capacidad de los establecimientos educacionales de resolver estas problemáticas.

Hablamos de insultos, discriminación, exclusiones y agresiones físicas. Así, en algunos colegios, parece gravitar una atmósfera de tensión que predispone a la descarga violenta y que podríamos decir se asocia a una subcultura de la violencia enraizada en el entorno escolar.

Es indudable que la situación reclama una atención especializada, así como la presencia de nuevos recursos psicopedagógicos y sociales, porque las raíces de los

comportamientos violentos no están en la escuela, y se requiere trabajar con esa perspectiva.

En efecto, la complejidad de este problema da pie para elaborar algunas reflexiones de resonancia familiar y social. Estamos viviendo tiempos confusos, en algunos casos de una gran violencia que ha llegado a ámbitos tan alejados de ella como deberían ser las aulas.

El debilitamiento de la autoridad familiar es un primer punto. Los especialistas dicen que “el poder joven” ha ido creciendo y la autoridad adulta se ha ido debilitando, lo que promueve la gradual sustitución de los códigos que deberían regular la conducta de padres e hijos.

Esa misma falta de autoridad se ha venido produciendo en el sistema educacional. Hace tiempo que la relación entre docentes y alumnos se ha ido planteando de manera también simétrica, en muchos casos como si fueran compañeros que se tratan de igual a igual.

Además, lo que siempre conocimos como disciplina ha recibido una suerte de embate ideológico que la muestra como un modo de represión y las sanciones como un producto del autoritarismo, con lo cual no sólo se deforma el significado de las palabras y los criterios de acción, sino que también se crean condiciones para un estado de confusión, sin valores y anárquico.

Por fin, al profundizar en las causas del problema, no puede omitirse la influencia de una sociedad confrontacional en la cual abundan lamentables ejemplos de incumplimiento de leyes, que crea indirectamente una fuente de contagio e imitación. Esa es otra dimensión del problema, otros son los responsables y las rectificaciones que hacen falta.